

Dreamers en la encrucijada:

Cuando la renovación de permisos en EE.UU. se convierte en barrera para la permanencia

La nación latinoamericana debe anticiparse al eventual retorno de migrantes mexicanos desde Estados Unidos, implementando iniciativas o programas de carácter permanente o una ley de retorno que facilite su reincorporación al mercado laboral, destacan analistas.

Según informa el rotativo local El Sol de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calcula que al menos 200.000 dreamers —término con el que se designa a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, denominado DACA— podrían enfrentar la posibilidad de ser expulsados ante los obstáculos administrativos que han encontrado para renovar sus autorizaciones de permanencia.

El programa DACA, implementado durante la gestión del exmandatario Barack Obama (2009-2017), otorga a hijos de migrantes indocumentados que arribaron a Estados Unidos la posibilidad de permanecer en territorio norteamericano, mediante un permiso sujeto a renovación bianual o hasta que obtengan la residencia por otra vía.

Sin embargo, medios como Los Angeles Times señalan que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), organismo responsable de gestionar estos trámites, ha postergado los procesos administrativos para la renovación de dicho permiso, situación que coloca en riesgo a cerca de 568.000 jóvenes inscritos en esta iniciativa o programa.

Aunque anteriormente se solicitaba a los beneficiarios iniciar los trámites con 120 días de antelación a la expiración de sus permisos, existen casos en los que los solicitantes han debido aguardar hasta seis meses para obtener una cita que les permita formalizar la solicitud de renovación.

Analistas consultados indican que resulta poco probable que se concrete una deportación masiva de dreamers, toda vez que esta situación guarda relación con la imposibilidad de renovar su autorización de estadía y no con una medida colectiva de expulsión.

El doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tomás Milton Muñoz Bravo, precisa que el programa DACA mantiene su vigencia, pero sus beneficiarios han visto entorpecido el proceso de renovación de permisos, como consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

Para el especialista en asuntos migratorios, se trata de una estrategia política orientada a forzar el retorno de estos migrantes, quienes ya cuentan con edades comprendidas entre los 30 y 40 años, evitando así destinar recursos para su deportación formal.

"En este momento, Estados Unidos no dispone de los recursos suficientes para llevar a cabo esa deportación masiva, particularmente de personas que son bien valoradas y apreciadas en territorio estadounidense. Básicamente, nos referimos a los beneficiarios del programa DACA", afirma Muñoz Bravo.

Al respecto, el doctor en sociología por la Universidad de Texas, Rodolfo Cruz, considera que el retorno de estos dreamers podría constituir una oportunidad significativa para México, siempre que se implementen los programas adecuados para su integración al mercado de trabajo.

"Ellos cursaron sus estudios allá, dominan dos idiomas, se desempeñaron en ciertos niveles profesionales. Son diversos los sectores económicos que podrían aprovechar una fuerza laboral más seleccionada, de mayor cualificación y que podría incorporarse con relativa facilidad a la economía mexicana", opina el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Muñoz Bravo recuerda que el país latinoamericano ya dispone de iniciativas como "México te abraza", las cuales ofrecen asistencia a los migrantes que retornan a territorio nacional, aunque también resulta necesario diseñar programas orientados a facilitar su inserción en la sociedad mexicana.

"Seguimos siendo una sociedad marcadamente discriminadora y, en ese sentido, con frecuencia aquellos que son deportados, que han transcurrido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y que no dominan con fluidez el español, han sido objeto de discriminación, han sido estigmatizados", señala el académico.

Hace poco, la Cancillería mexicana informó que, por primera vez en cinco décadas, se registró la cifra más baja de detenciones de migrantes indocumentados en la frontera con Estados Unidos, en el contexto de las políticas migratorias promovidas desde Washington.

Esta transformación en los flujos migratorios ha propiciado que, además de los mexicanos que optan por regresar al país, migrantes procedentes de Centro y Sudamérica permanezcan en territorio nacional ante la imposibilidad de cruzar la frontera en busca de oportunidades laborales.

"Hoy en día, México se ha convertido en un 'país tapón', lo cual significa que, en este esfuerzo por impedir el tránsito de migrantes por suelo mexicano, básicamente se ha obligado a que permanezcan por periodos prolongados, ya sea en la frontera sur, incluso también en la frontera norte y, en cierta medida, en el centro del país", comenta Muñoz Bravo.

En este escenario, Cruz refiere que México presenta un retraso en la elaboración de una ley de retorno que permita establecer programas permanentes de integración social y laboral, y que además brinde a la población migrante acceso a servicios de atención psicológica, de salud e incluso de vivienda una vez que retornen al territorio nacional.

"No existe algo permanente donde el mexicano que vivió durante 10, 15 o 20 años en Estados Unidos pueda dirigirse a una oficina y manifestar: 'Voy a regresar con mi familia, necesito que me brinden apoyo'", declara.

Para el investigador del Colef, la economía mexicana posee la capacidad suficiente para recibir tanto a connacionales que retornan como a migrantes de otras nacionalidades, toda vez que actualmente apenas representan el 1% de la población, mientras que en otros países este porcentaje supera el 10%.

Los especialistas destacaron que la presión en torno al tema migratorio persistirá, especialmente en la medida en que se aproximen las elecciones de medio término en EE.UU., dado que se trata de un tema que resulta redituable desde una perspectiva electoral para la administración actual.

"El asunto migratorio, curiosamente, al momento de explotar o de explorar los sentimientos xenófobos, suele funcionar para inclinar el voto a favor de quienes promueven [estos discursos], pero no necesariamente para modificar el curso cuando se están vulnerando los derechos humanos en contra de los inmigrantes, en este caso, en [suelo estadounidense]", detalla Muñoz Bravo.

En este contexto, Cruz reflexiona que, conforme se acerque la jornada electoral, nuevamente cobrarán relevancia temas como las redadas del ICE y se intensificará la presión sobre el gobierno mexicano.

"México se ha visto obligado a cooperar con esa política antimigratoria debido a presiones en materia de aranceles, comerciales y económicas. Me parece que el panorama continúa en esa misma línea", concluye el experto.